

Luchas sociales obligan a retroceder al gobierno y detienen el proceso de privatización

Por Marielle Palau*



Ante la agudización de las protestas sociales, mayoritariamente campesinas, el 6 de junio el Presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, se ve obligado a detener el proceso de privatización, al mismo tiempo que un grupo de parlamentarios retira el proyecto de ley antiterrorista impulsado por la embajada norteamericana y se compromete a la no privatización de las principales rutas del país. Se constituye ésta en una importante victoria popular, quizás inédita en América Latina por su contundencia, contra el gobierno y contra las políticas del FMI. Varios son los elementos que la posibilitaron. En este artículo se hará referencia a las dos más importantes: la crisis política y la unidad del movimiento popular.



20

■ Cronología de la profunda crisis irresuelta

Desde los inicios de la llamada transición paraguaya, en 1989, los cambios políticos y la ampliación de las libertades públicas fueron acompañados de intentos de aplicación de medidas de ajuste neoliberal impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y una crisis económica que se agudiza a partir del agotamiento del modelo de acumulación, caracterizado por el modelo agroexportador y de triangulación comercial ilegal en la frontera con el Brasil. Este escenario económico se dibuja sobre el mismo esquema político de un Estado corrupto y prebendario que por más de treinta años respaldó a la dictadura stronista.

Si las medidas impulsadas por el FMI, el BM y el BID sólo se han aplicado parcialmente y no en sus aspectos más neurálgicos a lo largo de la década del noventa, no se debió a la fuerza de las presiones de las organizaciones sociales

durante esa década. La debilidad de los gobiernos de turno, las contradicciones dentro de los sectores dominantes, la ingobernabilidad permanente que los caracterizó y la falta de consenso de la clase dominante fueron los elementos que durante la década pasada frenaron las intenciones de los citados organismos multilaterales.

El gobierno del Gral. Rodríguez¹, el primero de la transición, fue el único que se desempeñó en un marco de gobernabilidad: “no necesitó de acuerdos ni pactos parlamentarios explícitos para gobernar. El mandatario gozaba de gran consenso entre colorados y opositores y tenía una importante legitimidad popular” (Yore y Palau, 2000), pese a sus vínculos con el stronismo y las serias acusaciones de corrupción. Fue también en este período cuando se sentaron las bases legales de la democracia, tanto con la nueva Constitución Nacional como con la reforma del Código Electoral.

* Socióloga. Investigadora y miembro del Consejo de BASE. Investigaciones Sociales. Profesora en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

En las internas del Partido Colorado para elegir candidato a Presidente de la República y Vicepresidente para las elecciones nacionales de 1993, se produjo un hecho que ha-

bría de marcar fuertemente los posteriores acontecimientos de la “transición”. De acuerdo a las informaciones (bocas de urna) de gran parte de la prensa y de varios otros sectores políticos nacionales, en las internas coloradas realizadas en abril de 1992 la victoria correspondió al Dr. Luis María Argaña –probablemente el último caudillo tradicional y con cierto arraigo dentro del Partido Colorado– sobre el Ingeniero Juan Carlos Wasmosy, candidato del poder gubernamental que contaba con el apoyo de sectores que adherían explícitamente al neoliberalismo. El resultado final se conoció muchas semanas después, en cuyo ínterin fue cambiado el mismo Tribunal Electoral del Partido Colorado para producir un resultado favorable al candidato del Palacio de Gobierno. En consecuencia, correspondió oficialmente la victoria al Ingeniero Wasmosy, quien meses después accedería a la Presidencia de la República. Este hecho, más que anecdótico, es fundamental para entender el inicio de una crisis política que hasta la fecha no logra resolverse por dos elementos primordiales: el principal artífice de la victoria del Ingeniero Wasmosy fue el Gral. Lino Cesar Oviedo; el alto grado de ingobernabilidad, producto fundamentalmente de las propias contradicciones dentro del Partido Colorado, entre las cuales Oviedo juega a su vez un rol central.

Desde ese momento hasta hoy, primero como figura y luego como fantasma, Lino Oviedo es una constante en la débil transición paraguaya. En abril de 1996 produce el primer intento de golpe, por el que se le abre un proceso judicial, pero sólo cuando gana las internas del Partido Colorado es decretada su detención, motivo por el cual el Vicepresidente de su lista, Cubas, acompañado del segundo candidato más votado en las internas, conforman la dupla presidencial y ganan las elecciones nacionales en mayo de 1998, asumiendo la Presidencia y Vicepresidencia respectivamente.

A partir de este momento la ingobernabilidad se agudiza llegando a su punto culminante en marzo de 1999, cuando a partir del crecimiento de las movilizaciones sociales contra el gobierno de Cubas Grau –motivadas principalmente por la liberación de Lino Oviedo violando disposiciones del Poder Judicial– se produce la masacre a jóvenes movilizados, Oviedo huye a la Argentina y Cubas Grau pide asilo a Brasil.

Más allá de las figuras personales, el punto principal de la crisis radicaba en el intento de cambio del modelo estatal, lo cual generaba una creciente contradicción entre dos grupos económicos y con los mismos intereses prebendarios y populistas del Partido Colorado, cuyos recursos y poder político se veían amenazados por la propuesta neoliberal de privatización y por la ya acentuada crisis económica que reducía las posibilidades del prebendarismo y generaba una disputa por el reparto de la cosa pública entre quienes por décadas se enriquecieron a costa de y con la influencia del Estado.

La crisis política no se resolvió con el llamado Gobierno de Coalición², encabezado por Luis Ángel González Macchi, que a los pocos meses se fractura con la salida del Partido Liberal Radical Auténtico y se enfrenta con otro intento golpista³ y con el permanente fantasma de Oviedo, en el marco de una crisis económica que se va agudizando.

En el marco de esta profunda crisis política irresuelta, los débiles gobiernos fueron incapaces de aplicar a fondo recetas del FMI y del BM que entran en contradicción con el viejo modelo de acumulación-dominación. Las clases dominantes no pudieron llegar a un consenso sobre el nuevo modelo de dominación. A partir del año 2000 los grupos económicamente dominantes y sus partidos comienzan a lograr un mayor consenso, debido entre otras cosas a las presiones cada vez más fuertes del FMI y el BM, de la profunda crisis económica y de una cada vez mayor corrupción. Para ese año, el movimiento popular ya no es el mismo de la década de los ‘90: casi diez años de experiencia en el nuevo marco político lo ayudaron a fortalecerse y a ir supe- rando la fragmentación que lo había caracterizado.

■ El movimiento popular: de la fragmentación hacia la unidad

Hoy es bastante más fácil caracterizar al movimiento popular paraguayo que hace diez años, ya que ha superado en gran parte su fragmentación y atomización, sobre todo el movimiento campesino, que ha logrado ir articulando alrededor suyo a otras organizaciones sociales. El movimiento sindical, por su parte, no ha podido superar su profunda crisis, influenciada ciertamente por las políticas neoliberales, pero sobre todo producto de la corrupción de sus dirigentes históricos. Asimismo, ha emergido un movimiento sindical con bases en las empresas públicas y la administración central que aunque no ha logrado consolidarse tuvo cierta presencia, acicateado por las privatizaciones y el déficit fiscal que hizo atrasar los pagos de salarios y reducir las compensaciones.

Por otro lado, cabe señalar que tanto el movimiento barrial como el universitario, desde hace más de diez años, sólo han tenido esporádicas apariciones, pero no una presencia permanente en las luchas sociales. Asimismo, se debe recalcar la importante emergencia de movimientos juveniles, que aunque sin articularse con el resto de las organizaciones sociales, han tenido una presencia significativa, sobre todo post-marzo de 1999.

Después de la euforia de los primeros años de la transición política paraguaya, que se reflejó en la emergencia de nuevos sindicatos, en masivas invasiones de tierra tanto urbanas como rurales, y en el gran apoyo de la ciudadanía a las primeras huelgas generales⁴ y a las marchas campesi-

nas⁵, las organizaciones sociales paraguayas entran en una nueva fase de desarrollo.

El movimiento sindical, representado fundamentalmente por tres centrales obreras⁶, después de haber tenido un gran crecimiento hasta la primera mitad de la década de los '90, inicia un proceso de declive, crisis internas, acusaciones de corrupción y muy pocas conquistas reales para la clase trabajadora, así como también pérdida del apoyo de la ciudadanía a las últimas huelgas generales convocadas.

En el año 1995 un nuevo actor aparece en escena, la Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo (CESITEP), que inicia un proceso de movilizaciones contra la privatización, las cuales no logran convocar con fuerza a otros sectores y son percibidas simplemente como la defensa de sus puestos de trabajo más que como una posición realmente crítica al modelo neoliberal y sus consecuencias (*Informativo Laboral*, 1995).

Las organizaciones campesinas, por su parte, iniciaron desde los comienzos de la transición un proceso de reconstitución llevando a cabo importantes luchas, pero todas ellas fragmentadas y muy poco articuladas. Es a partir del 15 de marzo de 1994 (Martini, 1994), fecha en que se realiza la primera Marcha Campesina en Asunción, que el movimiento campesino inicia un proceso ascendente: se va constituyendo en el actor social más coherente y combativo, aunque dividido en dos grandes expresiones, cada una de ellas con sus propias alianzas.

Desde las primeras movilizaciones nacionales aparecen consignas anti-neoliberales, pero muy tímidamente. Las principales están centradas en reivindicaciones de carácter gremial y sectorial. Otro elemento importante es que las organizaciones campesinas van conformando grupos de apoyo con organizaciones urbanas para cada movilización, que además –sobre todo las primeras– cuentan con un apoyo de la ciudadanía asuncena (Galeano, 1997).

Dos son las principales referencias organizativas campesinas, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y la Federación Nacional Campesina (FNC). La primera articula en su interior a más de treinta organizaciones de base, regionales y nacionales. Tiene una estructura bastante laxa –propia de su estructura de coordinadora– y sus reivindicaciones se centran en los últimos años en la implementación de proyectos productivos y en demandas de tierra, salud y

educación. La FNC, por su parte, también con presencia e inserción en gran parte del país, tiene una estructura bastante más rígida y sus reivindicaciones en los últimos años están principalmente centradas en el cultivo y la industrialización del algodón. Ambas, sin embargo, coinciden en la necesidad de la reforma agraria y son contrarias a las políticas neoliberales. Asimismo, utilizan los mismos métodos de lucha –movilizaciones, invasiones de tierra y cortes de rutas–, constituyéndose esta última en la medida más fuerte de presión.

En este proceso iniciado en 1989 varios fueron los intentos de articulación y unidad de acción entre las principales organizaciones, tanto sindicales como campesinas. Muchos fueron los Congresos Unitarios, Congresos de Trabajadores y otros en los cuales se analizaba la situación de los sectores populares y se encaraban movilizaciones y luchas conjuntas, pero ninguno logró aglutinar a todas las fuerzas más importantes.

■ **La unidad de las organizaciones contra las políticas neoliberales**

La tenue aplicación de las medidas neoliberales, sobre todo las vinculadas a la privatización de las empresas públicas, se debió principalmente a la falta de consenso en las esferas de poder durante la década de los '90. Cuando en los últimos años, a partir de las presiones cada vez más fuertes del FMI y el BM y la urgente necesidad del gobierno de acceder a nuevos préstamos de estos organismos para evitar el colapso dado el déficit fiscal, logran generar las condiciones para iniciar el proceso de privatización, se encuentran con una fuerte resistencia del movimiento popular.

Las organizaciones populares ya no eran las mismas: habían realizado diferentes experiencias unitarias⁷, tenían una gran experiencia de lucha y habían obtenido –sobre todo el movimiento campesino– importantes victorias reivindicativas. Ya no aceptaban simples promesas del gobierno, sino que exigían acciones concretas para levantar sus medidas de presión. Asimismo, habían comprendido que sólo acciones coordinadas les darían las fuerzas necesarias para frenar el proceso de las privatizaciones.

Las luchas sociales de 2002 estuvieron marcadas por una mayor politización de las movilizaciones en torno a la agudización de las luchas antineoliberales y a la lucha con-

“Para las organizaciones sociales aglutinadas en el Congreso Democrático del Pueblo se inicia una nueva etapa (...) el eje de su accionar en los próximos meses girará en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad.”

tra el terrorismo de Estado. Un precipitante cercano se da en el mes de enero, cuando dos dirigentes políticos de izquierda son secuestrados y torturados (acusados del secuestro de la esposa de un empresario) por agentes vinculados a la policía, según las denuncias. Este episodio genera una serie de movilizaciones contra el terrorismo de Estado exigiendo la destitución del Fiscal General del Estado y conformándose la Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado (que a los pocos meses daría origen a la Plenaria Popular Permanente).

La FNC realiza su movilización anual el 20 de marzo exigiendo suspender la reforma de la banca pública e impulsar la industrialización del algodón, y criticando el sometimiento del gobierno a las presiones internacionales. A pesar de la negativa inicial del gobierno a detener el proceso, a partir de la movilización se compromete a la revisión del anteproyecto, para lo cual conforma una mesa de diálogo integrada por representantes gubernamentales y campesinos.

La MCNOC, por su parte, realiza a partir del 17 de abril su movilización en Asunción y, en forma simultánea, cortes de rutas en diferentes departamentos del país. Exige –al igual que la FNC– detener el proceso de reforma de la banca pública y la suspensión de las privatizaciones. Después de tres días logra que el gobierno retire el proyecto de Ley de la Banca Pública y levanta temporalmente las movilizaciones, emplazando al gobierno para que atienda sus reclamos; de lo contrario, volverán a las calles, y sobre todo a los cortes de ruta.

En las negociaciones con el gobierno también participan representantes de la FNC y de otras organizaciones sociales. Inician con mayor fuerza un proceso de unidad que da origen al Congreso Democrático del Pueblo.

La gran mayoría de las organizaciones se encontraban articuladas en dos espacios. Por un lado, en la Plenaria Popular, integrada por la MCNOC y otras importantes fuerzas campesinas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, estudiantes y movimientos y partidos políticos. Por otro lado, el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional, integrado por la FNC, OTEP⁸, CNT y Cambio para la Liberación⁹, entre otras. Ambas se habían constituido en momentos distintos y con algunas reivindicaciones específicas y diferenciadoras y otras comunes, como las anti-neoliberales.

Ante la inminente privatización de las empresas del Estado y el recrudecimiento de la represión, ambas coordinadoras deciden conformar el Congreso Democrático del Pueblo, que el 15 de mayo oficializa su constitución en una primera sesión con más de mil delegados/as, teniendo entre las principales resoluciones la realización de movilizaciones en todo el país para exigir la derogación de la ley 1.615 que ha-



bilita la privatización de las empresas del Estado, la ley de reforma de la banca pública, el anteproyecto de ley antiterrorista, el proyecto de ley de Concesión de las Rutas, la ley que hubiera creado el IVA agropecuario, y contra la corrupción e impunidad (*Informativo Campesino*, 2002[b]).

Varios son los elementos a resaltar: el carácter de las demandas, ya que si bien desde la década del '90 consignas anti-neoliberales estuvieron presentes en las movilizaciones tanto sindicales como campesinas, las mismas no tenían un carácter de exigibilidad, sino más bien de declaración de principios; la unidad de tantas organizaciones, en particular de la FNC y la MCNOC, que históricamente se encontraban enfrentadas, y sobre todo entre organizaciones sociales y partidos políticos. Por un lado, una corriente interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA¹⁰) es miembro del Frente Nacional, y por otro movimientos y organizaciones políticas de izquierda y progresistas, que si bien estuvieron presentes –insertas o apoyando– en las luchas sociales en forma permanente, por primera vez son integrantes plenos de un espacio de unidad con organizaciones sociales.

El 21 de mayo se inician las protestas, movilizaciones y cortes de ruta, en un escenario sumamente polarizado en que “*aliados el FMI, la FEPRINCO¹¹, la CEP¹² y el Ejecutivo, acorralan al Congreso para que acompañe la venta de COPACO el 30 de este mes*” (*ABC Color*, 2002[b]), al tiem-



po que el FMI condiciona acuerdos con el gobierno a la venta de la empresa telefónica y se desata una fuerte ofensiva del gobierno contra las organizaciones integrantes del Congreso Democrático del Pueblo, acusándolas de estar manipuladas por políticos, específicamente por el ovedismo, lo que es permanentemente desmentido por las mismas, al tiempo que expresan su rechazo a cualquier manifestación y expresión fascista.

Las movilizaciones se inician de manera escalonada. Los cortes de ruta se realizan en forma intermitente, generando largas e interminables colas de vehículos en diferentes rutas del país, y grupos de campesinos van llegando hasta Asunción. En este escenario se producen choques entre manifestantes y las fuerzas represivas, se decreta orden de detención contra cinco dirigentes del interior y son detenidos más de cien manifestantes en el departamento de Misiones, siendo ésta sólo una muestra de la criminalización de la protesta social. El Fiscal General del Estado declara, después de una reunión con el equipo económico del gobierno y con representantes de la Unión Industrial Paraguaya, que la Policía Nacional debe actuar de oficio para despejar las rutas que son bloqueadas por los manifestantes, ya que se lesionan derechos de terceros (*ABC Color*, 2002[a]).

En este marco de creciente polarización, en que el Ejecutivo continúa firme en su postura de no retroceder en el proceso de las privatizaciones y las respuestas represivas van en aumento, campesinos empiezan a desplegarse en grupos más grandes hacia la capital del país, coincidentemente con el momento en que el Parlamento Nacional debe

tratar la Ley Antiterrorista, impulsada abiertamente por la embajada norteamericana, y que para muchos sectores –incluidos los de derechos humanos– es inclusive más peligrosa para las organizaciones sociales que la ley represiva que amparaba al dictador Stroessner.

En un intento desesperado por detener la ola de protestas, el gobierno cede en cinco de los seis puntos: todos menos el retiro de la Ley 1.615. El Congreso Democrático del Pueblo, al mismo tiempo que festeja el triunfo parcial, anuncia que las movilizaciones se intensificarán hasta detener el proceso de privatización; las centrales obreras anuncian una huelga general, y dirigentes sociales vaticinan una explosión social si continúan las represiones.

En la ciudad de Cnel. Oviedo, a 130 Km. de Asunción, barreras policiales y de las fuerzas armadas impiden el tránsito de unos cinco mil campesinos hacia la capital. Se produce una fuerte represión en la que Calixto Cabral muere de un balazo y los dirigentes anuncian que “las conversaciones con el gobierno están cortadas” (*Informativo Campesino*, 2002[a]). Los campesinos traspasan las barreras y llegan hasta Caacupé (a escasos 48 km. de Asunción), desde donde amenazan al gobierno con un despliegue total de fuerzas. Se suceden las negociaciones durante todo el día martes 4 de junio. Al día siguiente, la Cámara de Senadores, en una reunión extraordinaria, suspende por tiempo indefinido la Ley 1.615.

Esta victoria fue posible por la combatividad y la unidad de las organizaciones populares, así como también por-

que la propia continuidad de Luis Ángel González Macchi como Presidente de la República estaba en juego, dado que las organizaciones componentes del Congreso Democrático del Pueblo estaban en condiciones de exigir y lograr su renuncia. Ante esta situación el gobierno quedó duramente golpeado. Su debilidad quedó evidenciada, sus posibilidades de negociación con el FMI y el Banco Mundial disminuidas. Desde ese momento su máxima aspiración es culminar su mandato en agosto de 2003. Para las organizaciones sociales aglutinadas en el Congreso Democrático del Pueblo se inicia una nueva etapa, caracterizada por la unidad, la firmeza y la combatividad: el eje de su accionar en los próximos meses girará en torno a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

■ Bibliografía

- ABC Color* 2002[a] 31 de Mayo, 4.
ABC Color 2002[b] 18 de Mayo, 3.
 Galeano, Luis 1997 “Campesinos presentes y ausentes”, en *Acción*, N° 173, Mayo.
Informativo Campesino 2002[a] (Asunción: Centro de Documentación y Estudios) N° 165, Junio.
Informativo Campesino 2002[b] (Asunción: Centro de Documentación y Estudios) N° 164, Mayo.
Informativo Laboral 1995 (Asunción: Centro de Documentación y Estudios) N° 65, Septiembre.
Informativo Laboral 1994 (Asunción: Centro de Documentación y Estudios) N° 89, Mayo.
 Martini, Carlos 1994 “Antes y después del 15 de Marzo”, en *Acción*, N° 142, Abril.
 Yore, Miriam y Palau, Marielle 2000 *Presidencialismo Moderado y Gobierno de Coalición. Experiencia y fracaso de una experiencia inédita* (Asunción: BASE. Investigaciones Sociales) N° 101, Documento de Trabajo.

■ Notas

- 1 Consuegro de Stroessner, quien lo depuso con el golpe de estado en febrero de 1989 y gana las primeras elecciones de la transición.
- 2 Conformada por el Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico (segunda fuerza electoral) y el Partido Encuentro Nacional (tercera fuerza política en ese entonces).
- 3 El fantasma del golpe de estado –presente prácticamente en toda la historia política paraguaya– aparece permanentemente.
- 4 El 2 de mayo de 1994 se realiza por primera vez desde 1958 una huelga general convocada por las tres centrales obreras más importantes, que tuvo un alto nivel de acatamiento (85%) según los organizadores, pero sobre todo fue importante porque contó con la adhesión de campesinos, estudiantes y la ciudadanía en general (*Informativo Laboral*, 1994).
- 5 La primera data de marzo de 1994.
- 6 Central Nacional de Trabajadores (CNT), Central Paraguaya de Trabajadores (CPT) y Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
- 7 Entre las últimas de estas actividades se puede mencionar el Seminario “Privatizaciones, neoliberalismo y crisis social” de comienzos de mayo de 2002 organizado conjuntamente por sindicatos públicos, en el que participaron también representantes de la FNC, MCNOC, organizaciones barriales, estudiantiles y de mujeres. El comunicado de cierre del Seminario fue una proclama de lucha unitaria contra las privatizaciones.
- 8 Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay.
- 9 Movimiento Interno del Partido Liberal Radical Auténtico.
- 10 Dentro del Partido Liberal Radical Auténtico existe una fuerte lucha interna, entre la corriente liderada por el actual Vicepresidente de la República y la liderada por Domingo Laino, histórico dirigente de esta agrupación.
- 11 Federación Paraguaya de la Producción, la Industria y el Comercio.
- 12 Conferencia Episcopal Paraguaya.